

San Miguel, veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

**Vistos:**

**I.- En cuanto a los sobreseimientos parciales y definitivos consultados.**

**Primero:** Que se dictaron sobreseimientos parciales y definitivos a fojas 1.947 por muerte de Basclay Humberto Zapata Reyes y a fojas 2.823 por muerte de Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito.

Al efecto, cabe tener presente que a fojas 1.945, 2.821 y 2.822, se agregaron los certificados de defunción de Zapata Reyes, Sepúlveda Contreras y Moren Brito, quienes fallecieron el 3 de diciembre de 2017, 7 de agosto de 2015 y 11 de septiembre de 2015, respectivamente.

En consecuencia, habiéndose extinguido por el solo ministerio de la ley su responsabilidad penal, corresponde sobreseer parcial y definitivamente la causa en relación a los referidos inculpados, por lo que se aprobarán los sobreseimientos, concordando en esta parte con el dictamen del Fiscal Judicial.

**II.- En cuanto a los recursos de apelación.**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los párrafos tercero y cuarto del considerando vigésimo octavo y del párrafo segundo del motivo trigésimo segundo, que se eliminan. Asimismo, se sustituyen los guarismos “150.000.000” y “50.000.000” que se leen en el fundamento sexagésimo octavo, por las cantidades de “60.000.000” y “20.000.000”, respectivamente.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Segundo:** Que en esta causa rol 207-2011, seguida ante la ministra en visita extraordinaria señora Marianela Cifuentes Alarcón, ingreso Corte N° 1.855-2020, por sentencia definitiva de uno de junio del año en curso, escrita a fojas 2.848 y siguientes, se declaró:

**En cuanto a la acción penal:**

I.- Que se absuelve a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y a Gerardo Ernesto Godoy García, de la acusación formulada en su contra en calidad de autores de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos, ambos en grado consumado, cometidos en contra de Guillermo González de Asís, a partir del 12 de septiembre de 1975.

II.- Que se condena a Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y a Miguel Krassnoff Martchenko, a cada uno, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo González de Asís, en grado consumado, cometido a partir del 12 de septiembre de 1975, con costas. Además, se dispuso que cumplirán la pena impuesta de manera efectiva, debiendo servirles de abono el tiempo que han permanecido en prisión preventiva en esta causa, esto es, desde el 26 de octubre de 2015 y 2 de octubre de 2015, respectivamente, según consta de los certificados de fs. 1.393 y 1.349, respectivamente.

**En cuanto a las acciones civiles:**



I.- Que se rechaza la excepción de prescripción extintiva de la acción civil opuesta por el Fisco de Chile.

II.- Que se acogen las demandas civiles de indemnización de perjuicios interpuestas en su contra por Nelson Guillermo Caucoto Pereira, en representación de Digna González de Asís, Francisco González de Asís y Clementina González de Asís, hermanos de Guillermo González de Asís, debiendo pagar el demandado, por concepto de daño moral, la suma de \$150.000.000, \$50.000.000 para cada uno, más reajustes e intereses, sin costas.

**Tercero:** Que en contra de dicha sentencia, los condenados Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko, apelaron verbalmente en el acto de notificación, según consta a fojas 2.927.

Asimismo, la parte querellante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fojas 2.937, dedujo recurso de apelación. Pide que se modifique la sentencia, condenando a los acusados Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Gerardo Ernesto Godoy García como autores del delito de secuestro calificado de Guillermo González de Asís; como asimismo a Miguel Krassnoff Martchenko, además como autor del delito de aplicación de tormentos en contra de la víctima señalada.

**Cuarto:** Que el Consejo de Defensa del Estado en representación del demandado civil Fisco de Chile, a fojas 2.945, apeló del fallo en cuanto acoge las demandas civiles. Pide que se revoque la sentencia en la parte civil y se rechace la demanda en todas sus partes o, en subsidio, se rebaje prudencialmente el monto fijado como indemnización de perjuicios.

**Quinto:** Que el tribunal *a quo* estableció como hechos en el motivo “décimo sexto”, sobre la base de presunciones judiciales que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en relación con los antecedentes que pormenorizó en los considerandos noveno, décimo, undécimo, “décimo tercero”, “décimo cuarto” y “décimo quinto” del fallo en alzada, los siguientes:

1°.- Que, mediante el Decreto Ley 521, publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 1974, se creó la Dirección de Inteligencia Nacional.

2°.- Que, a partir de esa fecha, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) estuvo a cargo del Coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido.

3°.- Que, el día 12 de septiembre de 1975, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) detuvieron, sin derecho, a Guillermo González de Asís, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), a la altura del paradero 35 de Gran Avenida José Miguel Carrera.

4°.- Que, posteriormente, se mantuvo a González de Asís encerrado, sin derecho, en el centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional denominado “Villa Grimaldi”, ubicado en José Arrieta N° 8.200 de la comuna de



Peñalolén, lugar en que fue sometido a brutales maltratos físicos por Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, entre otros, desconociéndose desde entonces su paradero.

5°.- Que, en ese tiempo, el centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional denominado “Villa Grimaldi” se encontraba a cargo del Mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, actualmente fallecido.

6°.- Que, asimismo, en el período indicado actuaban en “Villa Grimaldi” las agrupaciones operativas “Halcón” y “Tucán” de la Brigada Caupolicán, a cargo de Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Godoy García, respectivamente y la Brigada Purén, a cargo de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

**Sexto:** Que el tribunal *a quo* en el motivo “décimo séptimo” de la sentencia apelada, que los hechos descritos que afectaron la libertad ambulatoria, seguridad individual e integridad física de la víctima, configuran el delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141, inciso final, del Código Penal, que calificó por el tiempo en que se prolongó la acción, esto es, por más de noventa días, toda vez que hasta la fecha se desconoce el paradero de Guillermo González de Asís, unido a los malos tratos físicos a los que fue sometido durante su encierro.

De este modo, y por aplicación del principio *non bis in idem*, la sentenciadora modificó la calificación jurídica contenida en la acusación judicial, ya que los malos tratos sufridos por la víctima durante el encierro fueron considerados para calificar el delito de secuestro.

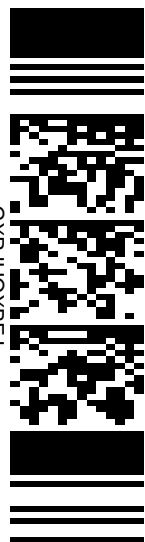
**Séptimo:** Que esta Corte comparte la recalificación efectuada por el tribunal *a quo* en orden a determinar que los hechos establecidos configuran el delito de secuestro calificado, mas no el de aplicación de tormentos, toda vez que, en la especie, concurren los elementos objetivos y subjetivos del primer tipo penal citado.

En efecto, a la fecha de ocurrencia de los hechos el artículo 141 del Código Penal disponía: “*El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados.*”

*En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito.*

*Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados”.*

De conformidad con lo previsto en el inciso tercero del citado artículo 141, vigente a la fecha de los hechos, son dos las formas de comisión del secuestro calificado: a) encerrar o detener -sin derecho- a una persona privándole de libertad por más de noventa días, y b) si en el encierro o en la detención resulta un grave daño en la persona o intereses del encerrado o detenido. Del precepto señalado se advierte que las hipótesis que plantea son independientes pero no excluyentes, porque si bien para



la concreción de la segunda hipótesis no se requiere que el afectado haya permanecido privado de su libertad por más de noventa días, es posible que mientras el ofendido haya estado detenido o encerrado por más de ese período, se le haya provocado un grave daño en su persona o en sus intereses, lo que se condice con el tiempo de privación de libertad y los apremios físicos o malos tratos sufridos por la víctima durante el encierro, descritos en el considerando “décimo sexto” del fallo en alzada.

En este contexto, resulta que el ilícito que recoge la situación fáctica acreditada es el secuestro calificado contemplado en el artículo 141, incisos primero y tercero, del Código Penal, por lo que se disiente en esta parte de la opinión del Fiscal Judicial, en cuanto a calificar los hechos como constitutivos de secuestro calificado y aplicación de tormentos del artículo 150 N° 1 del Código Penal.

**Octavo:** Que asimismo, esta Corte comparte lo decidido por el tribunal *a quo* en cuanto al grado de participación del sentenciado Miguel Krassnoff Martchenko en el delito que se ha tenido por establecido, y la calidad de autor que se le ha atribuido en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal. Del mismo modo, comparte lo razonado en lo que concierne al grado de participación del sentenciado Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo en el ilícito que se ha tenido por establecido, y la calidad de autor que se le ha atribuido en los términos del numeral 2° del citado artículo 15, por lo que se disiente de la opinión del Fiscal Judicial en este aspecto. En efecto, se estableció en el considerando vigésimo del fallo en alzada, que el acusado Rolf Wenderoth Pozo, a la época de los hechos, era el Jefe de la Plana Mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), comandada por el oficial Marcelo Moren Brito; de esta última dependían las Brigadas Operativas Caupolicán, Purén y Logística; la Brigada Caupolicán estaba integrada por las agrupaciones Halcón, Águila y Tucán, entre otras, y la agrupación Halcón, a cargo de Miguel Krassnoff Martchenko, investigaba al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Además, se acreditó que el 12 de septiembre de 1975, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional detuvieron, sin derecho, a Guillermo González de Asís y lo trasladaron al centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional denominado “Villa Grimaldi”, lugar donde estuvo privado de libertad y en el que agentes de la agrupación Halcón intervinieron de manera inmediata y directa en los interrogatorios y malos tratos dados a la víctima. Esta agrupación operativa dependía de la Brigada Caupolicán y ésta, a su vez, de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, comandada por el Mayor de Ejército Marcelo Moren Brito, quien, adicionalmente, se encontraba a cargo del referido centro de detención, siendo Wenderoth Pozo el Jefe de la Plana Mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, es decir, el superior jerárquico de un organismo asesor, propio de las organizaciones militares, que, por su naturaleza, ejercía mando táctico y asesoraba al comandante de la citada Brigada, de manera que en dicha calidad tenía pleno poder respecto del hecho delictivo, por lo que le corresponde participación de



autor del secuestro calificado de Guillermo González de Asís, conforme con lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Código Penal.

**Noveno:** Que del mismo modo, se comparte la decisión de absolución de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y la opinión del Fiscal Judicial al respecto, con excepción de la situación de Gerardo Ernesto Godoy García, que viene absuelto de la acusación de ser autor del delito de secuestro calificado de Guillermo González de Asís, lo que no se condice con los elementos de convicción allegados al proceso en relación con este encausado.

En efecto, los antecedentes reunidos en la causa, descritos en el fallo que se revisa, permiten establecer que el encausado Godoy García, a la época de los hechos estaba al mando de la agrupación Tucán, cuya misión era prestar apoyo a la agrupación operativa Halcón, a cargo de Miguel Krassnoff, encargada de investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), y en tal calidad dirigió el allanamiento del domicilio de un pariente de la víctima, lugar al que llegaron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional con el fin de aprehender a Guillermo González de Asís, lo que no lograron en esa oportunidad. De esta manera, el acusado Godoy García, en su condición de oficial jefe de una de las agrupaciones operativas que funcionaba en Villa Grimaldi, participó en la ejecución del delito por actos simultáneos, realizando acciones de apoyo a la agrupación operativa Halcón para detener a la víctima, con pleno conocimiento que en dicho centro clandestino se mantenía a personas opositoras políticas ilegalmente privadas de libertad, en la especie, pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionario.

En consecuencia, le corresponde una participación de autor del delito secuestro calificado de Guillermo González de Asís, conforme con lo establecido en el numeral 1° del artículo 15 del Código Penal, por lo que en esta calidad le será impuesta la pena.

Por estos motivos, será desestimada la solicitud de absolución por falta de participación, planteada por la defensa de Godoy García, al contestar la acusación formulada en su contra.

**Décimo:** Que en lo que atañe a la solicitud de la defensa de Godoy García de considerar en su favor la circunstancia del artículo 103 del Código Penal, esta Corte comparte el razonamiento del tribunal *a quo*, en cuanto concluye que no es aplicable en la especie, porque los encausados son responsables de un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

Efectivamente, el delito establecido en la sentencia apelada constituye un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía la víctima a la época de la detención; teniendo los acusados en calidad de autores, por otro lado, la calidad de agentes del Estado. Este tipo de ilícitos se caracterizan por la imprescriptibilidad, la imposibilidad de



amnistiarnos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables.

**Undécimo:** Que beneficia al encausado Gerardo Godoy García la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior, que se acredita con copia de su extracto de filiación y antecedentes, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, agregado fojas 2.460, que figura sin condenas por sentencias ejecutoriadas, por hechos ocurridos con anterioridad al actual juzgamiento y dictadas con anterioridad al inicio de éste.

La referida minorante de responsabilidad no se estima como muy calificada, por no existir antecedentes para privilegiarla, desestimando de este modo la petición de la defensa de Godoy García formulada al contestar la acusación.

**Duodécimo:** Que en lo que atañe a la penalidad, a la época de los hechos, el delito de secuestro calificado previsto en el artículo 141, incisos primero y tercero, del Código Penal, tenía asignada la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

Al favorecer al acusado Godoy García la atenuante de irreprochable conducta anterior, sin perjudicarle agravantes, no se puede imponer la pena en el grado máximo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 inciso segundo del mismo texto legal.

De esta manera, se le impondrá la pena en su grado medio, considerando la naturaleza del delito -un crimen de lesa humanidad- y la extensión del mal causado.

**Decimotercero:** Que en atención a la extensión de la pena privativa de libertad que se impondrá a Godoy García, no se accederá a la petición de la defensa de concederle alguno de los beneficios contemplados en la ley 18.216, por resultar improcedente.

**Decimocuarto:** Que, por lo razonado, se disiente parcialmente de la opinión del Fiscal Judicial manifestada en su dictamen de fojas 2.973, quien fue de parecer de aprobar y confirmar la sentencia en alzada, en cuanto absuelve a los encausados Iturriaga Neumann y Godoy García, con declaración que los condenados Wenderoth Pozo y Krassnoff Martchenko, lo son también por el delito de aplicación de tormentos.

**Decimoquinto:** Que en lo que toca a la demanda civil, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva en la parte que acogió las acciones civiles y rechazó las excepciones de preterición respecto de los hermanos del causante y por haber sido reparados en la forma expresada en las contestaciones de demanda, de reparación satisfactiva respecto de los actores, y de prescripción extintiva. Además, alega que el monto de la indemnización otorgada por daño moral resulta excesivo, a la luz y referencia de las sumas fijadas por los tribunales ordinarios de justicia, en causas similares de ejecutados y detenidos desaparecidos.

**Decimosexto:** Que esta Corte comparte los fundamentos del tribunal *a quo*, expresados en los motivos sexagésimo cuarto a sexagésimo séptimo del fallo apelado, para rechazar las excepciones opuestas por el Fisco de Chile.



Al efecto, se debe considerar que la reparación monetaria y la compensatoria o satisfactiva, no son excluyentes ni incompatibles, en atención a la naturaleza del daño moral y que su compensación, aunque procura ser integral, es un objetivo que no se puede alcanzar fehacientemente, desde que la aflicción y sufrimiento no son posibles de cuantificar. Asimismo, corresponde tener presente, en lo que atañe a la excepción de prescripción, que la acción civil deducida tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado, de manera que el derecho de los familiares de víctimas de un crimen de lesa humanidad encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la normativa de los tratados internacionales ratificados por Chile, que obligan al Estado a reconocer y proteger el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, debiendo mantenerse lo decidido en este aspecto.

**Decimoséptimo:** Que en lo que concierne al monto de las indemnizaciones por concepto de daño moral fijadas por la sentenciadora de primer grado, cuestionado por el Fisco de Chile, cabe consignar que si bien la compensación del daño moral procura ser integral, lo cierto es que en caso alguno conseguirá tal objetivo de manera fehaciente, en la medida que el dolor, la aflicción y el pesar causado a los familiares de la víctima por el hecho ilícito, no son dables de cuantificar, motivo por el que al regular el quantum de la indemnización se utilizará como parámetro sumas reguladas en otras causas por hechos similares, en relación con el grado de parentesco de los actores con la víctima, cantidades que se determinarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 408 N° 5, 500, 510, 514, 527 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

**I.- En cuanto a los sobreseimientos.**

**a).-** Que **se aprueban** los sobreseimientos parciales y definitivos consultados de fojas 1.947 y 2.823, dictados con fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y veinticinco de mayo de dos mil veinte respectivamente, en relación a Basclay Humberto Zapata Reyes, Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Luis Manuel Moren Brito.

**II.- En cuanto a la acción penal.**

**b).-** Que **se revoca** la sentencia definitiva apelada de uno de junio del año en curso, escrita a fojas 2.848 y siguientes, en la parte que absuelve a Gerardo Ernesto Godoy García de la acusación formulada en su contra en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Guillermo González de Asís, cometido a partir del 12 de septiembre de 1975, y se declara que se le condena como autor del referido delito, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, con costas.



El sentenciado cumplirá la pena impuesta de manera efectiva, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció en prisión preventiva en esta causa.

c).- Que **se confirma** en lo demás la referida sentencia.

### III.- En cuanto a la acción civil.

d).- Que **se confirma**, en lo apelado, la sentencia definitiva de uno de junio del año en curso, escrita a fojas 2.848 y siguientes, **con declaración** que se reduce a \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada demandante, el monto de la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral que deberá pagar el Fisco de Chile a Digna González de Asís, Francisco González de Asís y Clementina González de Asís, más los reajustes e intereses señalados en el fallo que se revisa.

Se deja constancia que la ministro señora Mera, ha cambiado de posición en lo que dice relación con la prescripción de la acción civil, ahora rechazándola, en atención al reconocimiento que ha hecho el Estado de Chile de la imprescriptibilidad de dicha acción, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en causa “Ordenes Guerra y otros VS. Chile”, fallada con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho.

Regístrese, comuníquese y devuélvase con sus tomos.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

**Rol N° 1.855-2020 PENAL.**

Pronunciada por la Quinta Sala-Zoom de la Ittma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana Mera Muñoz y señora Ma. Catalina González Torres. Se deja constancia que no firma la ministra señora González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan L., Liliana Mera M. San miguel, veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

En San miguel, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

